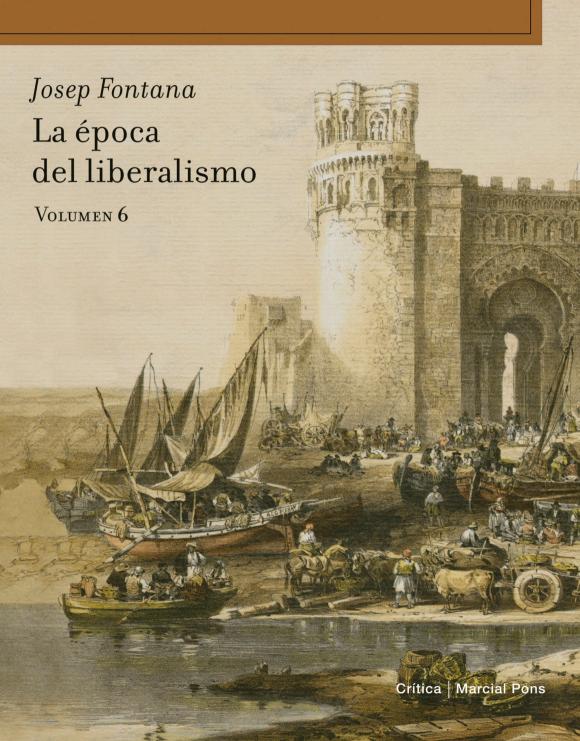
HISTORIA DE ESPAÑA

JOSEP FONTANA Y RAMÓN VILLARES - Directores



HISTORIA DE ESPAÑA

JOSEP FONTANA Y RAMÓN VILLARES - Directores

Josep Fontana La época del liberalismo

Crítica | Marcial Pons

HISTORIA DE ESPAÑA

JOSEP FONTANA Y RAMÓN VILLARES - Directores

- HISPANIA ANTIGUA Domingo Plácido
- 2. ÉPOCAS MEDIEVALES
 Eduardo Manzano Moreno
- 3. Monarquía e Imperio Antonio-Miguel Bernal
- 4. La crisis de la Monarquía Pablo Fernández Albaladejo
- 5. Reformismo e Ilustración Pedro Ruiz Torres
- 6. La época del liberalismo Josep Fontana

- 7. RESTAURACIÓN Y DICTADURA Ramón Villares y Javier Moreno Luzón
- 8. República y guerra civil Julián Casanova
- 9. La dictadura de Franco Borja de Riquer
- 10. España en democracia Santos Juliá
- ESPAÑA Y EUROPA
 José Luis García Delgado,
 Juan Pablo Fusi y José Manuel
 Sánchez Ron
- 12. HISTORIA Y MEMORIA José Álvarez Junco

Primera edición: marzo de 2007 Primera edición en esta nueva presentación: febrero de 2015

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal) Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Diseño de la colección y de la cubierta: Jaime Fernández Ilustración de la cubierta: Litografía de Pérez de Villa-Amil Realización Àtona S.L.

© del presente volumen, Josep Fontana, 2007

© Marcial Pons/Editorial Planeta S. A., 2015 Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España) Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es

ISBN: 978-84-9892-807-5 Depósito legal: B. 70 - 2015 2015. Impreso y encuadernado en España por Book Print

Índice

| Intro | oducción general, Josep Fontana y Ramón Villares | VII |
|----------------------------------|--|-----|
| Prólo | ogo, Josep Fontana | XV |
| 1. | España a comienzos del siglo XIX | 1 |
| 2. | Guerra y revolución, 1808-1814 | 37 |
| 3. | Restauración y revolución, 1814-1823 | 79 |
| 4. | La transición, 1823-1834 | 115 |
| 5. | La revolución liberal, 1834-1840 | 147 |
| 6. | La revolución traicionada, 1840-1844 | 185 |
| 7. | La contrarrevolución moderada, 1844-1854 | 219 |
| 8. | Apogeo del liberalismo autoritario, 1854-1863 | 267 |
| 9. | La crisis final del sistema, 1863-1868 | 315 |
| 10. | La revolución de 1868 | 351 |
| 11. | Un tiempo de esperanza y frustración, 1873-1874 | 385 |
| 12. | Un balance de la época del liberalismo | 409 |
| Apé | NDICES | |
| Bibl | iografía esencial recomendada | 443 |
| Cronología | | 457 |
| Cartografía | | 472 |
| Las cifras de la historia | | |
| Documentos y testimonios | | 503 |
| Índi | ce alfabético | 545 |
| Procedencia de las ilustraciones | | |

Capítulo 1

España a comienzos del siglo xix

Una corona en almoneda

En la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 tuvo lugar en el real sitio de Aranjuez, donde se encontraba la familia real, un motín organizado por una veintena de grandes de España, con el apoyo de la guardia real y de la población local. Su propósito era impedir la marcha de los reyes que, alarmados por la conducta de las tropas francesas que entraban en España, pretendían dirigirse a Sevilla. Los amotinados querían, por su parte, que no se llevasen al príncipe de Asturias, Fernando, a quien creían en peligro en manos del favorito real Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.

Carlos IV había intentado aplacar la inquietud pública el día 16 con una proclama en que negaba que tuviese intención de marchar y aseguraba que «el ejército de mi caro aliado, el emperador de los franceses, atraviesa mi reino con ideas de paz y amistad»; pero la desconfianza mantuvo en pie de vigilancia a los habitantes de un Aranjuez en que habían aparecido pasquines con vivas al rey y al príncipe de Asturias y mueras «al perro Godoy».

Hacia la medianoche se inició un alboroto en que paisanos, criados de palacio y soldados desbandados asaltaron la casa de Godoy, sin encontrarle (días después, Pedro Agustín Girón vio en Toledo gentes que llevaban como trofeos «trozos de muebles

y aun de espejos de la casa saqueada»). Aquella misma madrugada exoneraba el rey al valido de «sus empleos de Almirante y Generalísimo» y al día siguiente la multitud le descubrió, escondido entre unas esteras, y estuvo a punto de matarlo: «el pueblo pedía a voces su cabeza; le dieron una cuchillada en la cara, un fuerte palo en las espaldas y una pedrada en la boca, de cuyas resultas empezó a desangrarse».

A las siete de la tarde del 19 de marzo de 1808 Carlos IV abdicaba en su hijo, desde este momento Fernando VII, que comenzó a reinar por un fugaz período de poco más de un mes y medio. La noticia de que el valido había sido apresado produjo en Madrid, en la tarde de este mismo día, «un motín como no se había visto en largos años», que no fue reprimido por unas tropas que acabaron sumándose a él. Se asaltó la casa en que vivía Diego Godoy, hermano del favorito, se echaron al fuego sus pertenencias, y se pasó después a asaltar los domicilios de otros personajes a quienes se suponía amigos o protegidos suyos, como el odiado ministro de Hacienda, Cayetano Soler. El alboroto prosiguió toda la noche, reanimado por la noticia de la abdicación de Carlos IV, que fue recibida con gritos de «Ya tenemos rey nuevo». No fue sólo Madrid, sino que, como escribía en Salamanca Joaquín Zaonero, «fue tan general en todo el reino el gozo, que no hubo pueblo que no la celebrase».

Este suceso, el llamado «motín de Aranjuez», culminaba una larga querella familiar que enfrentaba al príncipe de Asturias, Fernando, con sus padres y sobre todo con el favorito, a quien se suponía amante de la reina María Luisa y de acuerdo con ella para desheredar, o incluso asesinar, al príncipe de Asturias.

Manuel Godoy había salido de su Extremadura natal a los diecisiete años para servir en los guardias de corps, sin más méritos que lo distinguiesen que los de su físico. «Era de alta estatura, lleno de carnes, aunque no gordo, muy cargado de espal-

das, a punto de llevar la cabeza algo baja, de pelo rubio y color muy blanco ... Sobre la blancura de sus mejillas relucía un vivísimo carmín» que los maldicientes achacaban al uso de algún afeite. Llamó la atención de la princesa de Asturias María Luisa, quince años mayor que él, y se convirtió al parecer en su amante.

Tras largos años de consentimiento casi universal en considerar a María Luisa como una mujer corrompida —el padre Salmón aseguraba que tenía en palacio «un burdel o serrallo» de jóvenes escogidos por sus cualidades anatómicas—, los biógrafos recientes de Godoy parecen empeñados en negar que existiese cualquier relación física entre el favorito y la reina. Algo que resulta difícil compaginar con el convencimiento en un sentido contrario que parecía haber en la propia familia real. El príncipe de Asturias, Fernando, aprobó la publicación de panfletos contra Godoy en que se decía: «La realeza te hizo / muchos favores, / y tu sólo le diste / ajipedobes. / Anda, Luisa, / pronúncialo a la contra, / verás que risa». Manuel José Quintana, tras describir a lord Holland, el hispanista y político británico, la ruina producida por la gestión de Godoy, concluía: «A tan alto precio costeamos los españoles las liviandades de María Luisa».

El príncipe de Asturias, Fernando, que tenía en estos momentos veintitrés años, había sido un joven enfermizo, sin la fortaleza ni el gusto por los ejercicios físicos de Carlos IV. Recibió poco afecto de sus padres, quienes no se preocuparon de que tuviese una buena educación, y creció con resentimiento por las atenciones que éstos reservaban para Godoy, nombrado sucesivamente príncipe, generalísimo y almirante.

A los dieciocho años lo casaron con María Antonia de Nápoles, una joven de su misma edad, minada por la tuberculosis, quien contaba en su correspondencia la desilusión que tuvo al encontrarse frente a aquel joven obeso, de aspecto poco agraciado y voz aflautada, que iba a tardar casi un año en consumar el

matrimonio y que, en palabras de su propia esposa, «no hace nada, ni lee, ni escribe, ni piensa», lo que contrastaba con la educación y la viveza de ánimo de la princesa. Con el tiempo aprendería sin embargo a estimar a un esposo al que definía como «bueno, pero sin instrucción ni talento natural, ni tan sólo despierto».

María Antonia se implicó en las divisiones y pugnas de la corte, donde se estaba formando un partido contrario a Godoy en torno a los príncipes y a una serie de personajes de la aristocracia, como los duques del Infantado y de San Carlos o el conde de Teba, y con el apoyo de la Iglesia, resentida por las exacciones que le había impuesto el favorito. Un partido que, en materia de relaciones internacionales, se mostraba inclinado a Gran Bretaña, en contradicción con la alianza que Godoy mantenía con Napoleón. El agravamiento de la enfermedad de María Antonia acabó con su muerte en mayo de 1806, «en brazos de Fernando, su esposo, su compañero ... en las penas, las tristezas y humillaciones».

El príncipe quedaba sin una compañera inteligente, que pudo haber orientado su vida de otro modo, rodeado de intrigantes de pocas luces y acechado por un Godoy que necesitaba asegurar su futuro antes de que muriese Carlos IV, sabedor del rencor que hacia él sentía el heredero de la corona, lo que ayuda a entender que se implicase en un acuerdo con Francia como el de Fontainebleau, con el propósito de que el desmembramiento de Portugal le permitiese asegurar su futuro.

Tras la muerte de su esposa, Fernando dio un giro para aproximarse a Napoleón, a quien escribió para implorar su «protección paternal» y pedir que le diese por esposa a «una princesa de su familia». La carta fue descubierta por los espías de Godoy y condujo a una inspección de los papeles del príncipe y a que Carlos IV denunciase públicamente, el 30 de octubre de 1807, que su hijo había pretendido destronarle. El llamado «proceso de El Escorial», en que el tribunal acabó absolviendo a todos los acusados, tenía el propósito de desacreditar al príncipe, a lo que había de contribuir también la publicación de las cartas humillantes en que se le obligó a pedir perdón a sus padres, pero la realidad fue que todo ello se convirtió para la opinión pública en una evidencia más de que existía una conspiración para impedir que el príncipe heredase el trono, y tal vez para cedérselo al odiado Godoy. «No se alucina tan fácilmente a un público, cuando él no quiere ser engañado», diría el padre Salmón, y el de Madrid estaba convencido de «que el autor de dichas cartas era don Manuel Godoy».

Mientras la familia real portuguesa, incapaz de hacer frente a los ejércitos napoleónicos que invadían su país, huía al Brasil, millares de soldados franceses seguían cruzando la frontera y se adentraban por España de forma que parecía tener poco que ver con las necesidades de la conquista de Portugal. De ahí que Carlos IV hubiese pensado, aconsejado por Godoy, en pasar a Sevilla, desde donde eventualmente podría huir hacia América (lo que quería impedir Napoleón, que envió a su embajador en Madrid a participar ocultamente en los sucesos de Aranjuez). En estos momentos había en la Península unos 65.000 soldados franceses que habían ocupado ya Pamplona, San Sebastián, el fuerte de Figueres y la ciudad de Barcelona, que no estaba precisamente en el camino hacia Potugal, en la que Duhesme había entrado el 13 de febrero de 1808 con 5.427 hombres y 1.830 caballos, anunciando que iba a quedarse allí tan sólo tres días, antes de seguir su marcha hacia Cádiz, con el pretexto de prevenir un posible desembarco inglés. Lejos de ello, el día 15 entraron en la ciudad cuatro mil soldados más y el 29 los franceses se apoderaron de los fuertes de la Ciudadela y del castillo de Montjuïc.

El 24 de marzo Fernando VII entraba en Madrid en medio del júbilo general y al día siguiente la *Gaceta* publicaba el real

decreto en que Carlos IV afirmaba que «como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos», había decidido abdicar en su primogénito. Fernando VII comenzó su reinado confiscando los bienes de Godoy y anulando las medidas que le habían enfrentado a la Iglesia.

Un día antes que el nuevo rey, había llegado a Madrid Joaquín Murat, duque de Berg y cuñado de Napoleón, al frente de un cuerpo de tropas francesas que fueron recibidas «con todas las demostraciones de júbilo y amistad que corresponden a la estrecha y más que nunca sincera alianza que une a los dos gobiernos». Pero aunque se suponía que venían a dar apoyo a Fernando, Murat se negó a reconocer al nuevo soberano hasta tener la aprobación del emperador e incitó a Carlos IV a protestar por la pérdida de la corona, a la vez que animaba a Napoleón a aprovechar las circunstancias para adueñarse del país.

Pronto iban a empezar, por otra parte, los primeros choques entre las tropas francesas y la población: en la última semana de marzo hubo por lo menos seis soldados franceses muertos en reyertas de calle y de taberna, y la excitación popular siguió aumentando en abril, hasta suscitar temores de un estallido violento. Finalmente, la liberación de Godoy, exigida por los franceses a petición de Carlos IV y de su esposa, vino a colmar la medida de la indignación colectiva: el escenario estaba preparado para un levantamiento popular.

Fernando, que necesitaba el apoyo del emperador, quien había anunciado que viajaba hacia España, dijo el 8 de abril que había decidido ir a recibirlo en persona, de acuerdo con «la estrechísima amistad» que existía entre ambos reinos. Como calculaba estar fuera pocos días, dejaba el poder a una Junta de gobierno, con la instrucción de que procurasen mantener buenas relaciones con los franceses.

¿Cuáles eran las intenciones de Napoleón? Unas semanas más tarde, durante los acontecimientos de Bayona, publicó una proclama en que sostenía que su propósito inicial había sido el de ir a Madrid para inclinar a Carlos IV «a que hiciese en sus dominios algunas reformas necesarias», pero que, tras lo que había sucedido en Aranjuez, consideraba que, «como soberano vecino, debo enterarme de lo ocurrido antes de reconocer esta abdicación». La verdad era que estaba dispuesto desde mucho antes a echar a los Borbones del trono de España y de sus Indias, a colocar en él a un miembro de su familia y a introducir en el país una serie de reformas modernizadoras por las cuales pensaba que los españoles iban a estarle agradecidos, aunque las tuviesen que pagar participando en los costes globales de su imperio.

La influencia francesa en España iba por entonces mucho más allá de la política o de la literatura. La participación de los franceses en la economía española era considerable. Tenían en la Península una red de intereses que iba desde los buhoneros que vendían sus mercancías por los pueblos a los banqueros establecidos en Madrid, por cuyas manos pasaba buena parte de los beneficios coloniales y que drenaban los metales preciosos fuera de la Península, convirtiéndose en los mayores beneficiarios del imperio indiano. Tenía cierta lógica que Napoleón intentase conseguir un control total del negocio americano, que era a lo que en realidad aspiraba con la invasión, puesto que opinaba que «España sin sus colonias es una carga». Que no esperaba mucha resistencia de un pueblo al que menospreciaba lo demuestra el hecho de que enviase a la Península tropas bisoñas, con escasa preparación.

Fernando, a quien Savary, el hombre que Napoleón había enviado para intervenir en la pugna familiar de los Borbones, había convencido de que él y su padre debían someterse al arbitraje del emperador—algo que ellos mismos llevaban ya mucho

tiempo pidiendo—, salió de Madrid el 10 de abril y comprobó que todo el camino estaba lleno de tropas francesas. El 13 llegó a Vitoria, de donde salió el 19 para dormir en Irún y acabar, ante las exigencias de Napoleón, dirigiéndose a Bayona, en suelo francés, donde poco después, el 29 de abril, se le reuniría Carlos IV, acompañado de su esposa y de Godoy.

En los primeros días de mayo, mientras llegaban también de Madrid los infantes Francisco y Antonio, se irían produciendo en Bayona, en medio de escenas de una violencia degradante, los episodios que dejarían la corona en manos de los Bonaparte. Carlos IV consiguió que su hijo se la devolviera y la cedió a Napoleón, con las renuncias a la sucesión de los otros miembros de su familia. Carlos IV, su esposa y los suyos, incluyendo a Godoy y a una amante suya, se instalaron primero en Compiègne y, más adelante, en Marsella, mientras Fernando y los infantes Antonio y Carlos fueron enviados al palacio de Valençay, al cuidado y bajo la vigilancia de Talleyrand.

Estos sucesos dinásticos, que habían conducido a que los dos bandos de la familia pusieran la decisión de sus querellas, y con ello la suerte de la propia monarquía, en manos de Napoleón, sometiéndose a su arbitraje, no son, sin embargo, los que explican la desastrosa situación de España en 1808.

Una monarquía en crisis

El hundimiento de la monarquía española como gran potencia era ya en 1808 una realidad. La guerra de la Independencia agravó la situación, pero no fue la causa que la produjo. Contribuyó, sin embargo, a enmascarar el hecho de que la crisis nacía

del fracaso del proyecto político de los Borbones españoles, y dio pie a que, una vez acabada la contienda, se pensase que todos los males nacían de ella y se difiriesen las soluciones necesarias para enmendar un rumbo que había conducido al desastre.

Un desastre que tenía una de sus bases en el fracaso de la política internacional de la monarquía española, que se había arruinado en un vano intento de asumir un papel de gran potencia en medio de los enfrentamientos entre Francia y Gran Bretaña, ligando su suerte a la de Francia por una alianza «de familia» con los Borbones franceses, que se convertiría más tarde, tras el paréntesis de la guerra contra la Francia revolucionaria, en una relación de dependencia que acabaría convirtiendo al gobierno español en poco más que un satélite del imperio napoleónico.

Esta política llevó además a la ruina de la hacienda española. Carlos IV, llegado al trono en 1788, había heredado de su padre los costosos compromisos de su política internacional y unos recursos insuficientes para financiarlos: durante los veinte años de su reinado, hasta la crisis final de 1808, los gastos del estado se duplicaron, mientras sus ingresos se mantenían estables. La consecuencia de «una administración desconcertada de veinte años», como diría en 1811 Canga Argüelles, ministro de Hacienda de las cortes, fue la creación de toda una nueva serie de cargas que irritaron a la Iglesia y sublevaron a los campesinos, un aumento de la dependencia de los ingresos coloniales y, sobre todo, un crecimiento desastroso de la deuda pública, que se multiplicó por cuatro entre 1759 y 1808, hasta llegar a un punto en que el gobierno fue incapaz de atender los réditos y amortización de los títulos emitidos.

La mayor parte de la deuda contraída era interna y su partida más importante surgió de la emisión de «vales reales», títulos de un empréstito amortizable en un plazo de veinte años que debían rendir un 4 por 100 de interés. Como su aceptación se declaraba obligatoria, se esperaba que sus tenedores los utilizasen en las transacciones como papel moneda, lo que podría conducir a que circulasen sin que se pidiera su amortización una vez llegase el plazo en que vencían. Pero no había en aquellos momentos, con moneda de plata abundante y una vida comercial muy limitada, demanda para una moneda fiduciaria y, por otra parte, los vales no eran reembolsables a la vista -no podían convertirse en moneda metálica antes de su vencimiento—, de modo que era lógico que fuesen considerados por quienes los compraban como deuda, de la que se esperaba cobrar intereses y recuperar el montante cuando llegase su amortización. En el momento en que el gobierno, que había multiplicado imprudentemente las emisiones, se vio impotente para atender al pago de intereses y a la amortización, los vales se desvalorizaron y los capitales que se habían invertido en ellos —como una buena parte de los realizados por los comerciantes andaluces que negociaban con América- quedaron atrapados sin salida, ante la imposibilidad de vender sin grandes pérdidas unos títulos que habían visto caer verticalmente su cotización.

La guerra contra la Francia revolucionaria había obligado además a recurrir a nuevas contribuciones sobre el clero, autorizadas por el papado, que culminaron en la desamortización eclesiástica de 1798, que permitía vender en subasta los bienes de hospitales, hospicios y obras pías para ingresarlos en la Real caja de amortización de la deuda, que prometía pagar a sus antiguos propietarios eclesiásticos un interés anual del 3 por 100 de lo que se obtuviese con la venta de estos bienes, lo que se suponía que representaba una suma equivalente a los beneficios que producían normalmente las fincas vendidas. Pero los religiosos, que sabían que el estado era insolvente y no iba a atender estas obligaciones, se indignaron ante la actuación de un Godoy

al que Pío VII había calificado en otros momentos de «columna de la fe» y que ahora era denunciado por los eclesiásticos como poco menos que un revolucionario impío, «enemigo de las almas del Purgatorio».

La nueva guerra contra Gran Bretaña, iniciada en 1796, tuvo como consecuencias la derrota naval del cabo San Vicente, la pérdida de las islas de Menorca y de Trinidad, y el bloqueo del comercio y la navegación con las colonias americanas. La paz de Amiens, firmada en marzo de 1802, parecía poner fin a estos enfrentamientos: los ingleses devolvían Menorca, pero no la isla de Trinidad, y se reanudaba el tráfico con las colonias americanas. La paz, que duró poco más de dos años, hizo renacer por un tiempo la esperanza de que las cosas podían volver a ser como antes. A Cádiz, nos dice Alcalá Galiano, «empezaron a venir en abundancia buques de varios puntos de América, todos con buenos cargamentos de producciones preciosas y de gran valor en el comercio y, sobre todo, de plata». Un folleto valenciano de la época exclamaba: «¡Qué momento de felicidad para este pueblo después de la cadena inmensa de desastres que nos había acarreado una guerra marítima!». Fueron éstas las últimas horas de un mundo feliz que no podía durar.

La paz comenzó a estar en peligro cuando el gobierno español aceptó firmar, en octubre de 1803, un paradójico «tratado de neutralidad» en que, para librarse «de las obligaciones impuestas a España por los tratados que unen a ambos estados», aceptaba pagar a Francia un «subsidio» mensual de seis millones de francos. Aunque se negoció en secreto, no tardaron en enterarse de él los ingleses, que lo consideraron una vulneración del tratado de paz y replicaron atacando junto al cabo Santa María cuatro fragatas españolas que transportaban cinco millones de pesos fuertes, de las que una saltó por los aires y las otras tres fueron apresadas. La respuesta española fue una nueva declaración de

guerra a Gran Bretaña, en diciembre de 1804, pomposamente anunciada por Godoy en una «proclama a la nación española y al ejército» en que, de acuerdo con su cargo de «generalísimo», reclamaba que todos los jefes militares debían entenderse «directa y privadamente conmigo» (lo que explica que en 1808 el nuevo ministro de la Guerra no encontrase datos acerca del número de hombres de armas que había en España o de su situación exacta; sólo el príncipe-generalísimo lo sabía).

De nuevo en la órbita de Napoleón, recientemente proclamado emperador, el gobierno se vio obligado a secundar sus planes de guerra, para los que necesitaba de la flota española. Unida a la francesa y bajo la dirección del almirante Villeneuve, realizó una inútil expedición a las Antillas, regresó inmediatamente después a Europa, huyendo de enfrentarse a la británica mandada por Nelson, para verse, en julio de 1805, envuelta en un combate a la altura de Finisterre. Marchó después a guarecerse en Cádiz, mientras Godoy fraguaba un insensato proyecto para asaltar Gibraltar con los reclusos del presidio de Ceuta.

La escuadra conjunta franco-española salió de Cádiz el 20 de octubre para librar la que había de resultar desastrosa batalla de Trafalgar. Un enfrentamiento del que dirá uno de los participantes: «¡Qué combate! ¡60 navíos y quedar desmantelados más de 40! Todos manifestaron mucho valor; pero los ingleses a esto añadían su pericia marinera y la de sus buenos artilleros».

Las pérdidas de la flota española fueron tres navíos apresados por los ingleses, tres hundidos durante el combate y cuatro que el temporal destrozó, echándolos sobre la costa; los otros cinco quedaron gravemente dañados. Alcalá Galiano, cuyo padre había muerto en la batalla, nos describe el panorama de la playa cercana, «cubierto el suelo de destrozadas reliquias de buques arrojadas a tierra por el empuje de las aguas y del viento, de modo que a cada paso embarazaban el tránsito al carruaje trozos

de jarcia, de arboladuras, de cascos, todo hecho trizas por las balas, y de trecho en trecho algunos cadáveres en el estado doblemente horroroso que da llevar días de muerto, serlo por las balas y haber pasado en el agua largas horas».

Una flota cuya construcción había consumido los recursos obtenidos del endeudamiento del estado y de la tributación extraordinaria con que se había cargado al país, quedó destrozada en una lucha sin provecho alguno para España. Pero la pérdida peor no fue la de los barcos, sino la de los hombres: jefes como Gravina, Dionisio Alcalá Galiano o Churruca, oficiales, guardiamarinas y más de un millar de muertos de la marinería. Vázquez Figueroa, que fue ministro de Marina en tres ocasiones, sostenía que la gran flota de estos años era «desproporcionada a la marinería que teníamos: como un gigante con una gran cabeza, piernas flacas y pies chicos y débiles», de modo que «conforme fuimos experimentando contratiempos, no pudimos irnos reponiendo, no en lo material, sino en lo personal». Lo peor era que estas pérdidas, que significaban el fin de España como potencia naval, hacían imposible el mantenimiento del imperio en América.

Godoy, que en sus memorias pretende eludir su responsabilidad —«no pudiendo culparme mis contrarios del desastre de Trafalgar, han culpado mi política»—, calla que las consecuencias de la derrota se vieron agravadas por su inconsciencia, al ordenar inmediatamente después, contra la opinión de los jefes de la flota, «poner en acción todos los medios imaginables para reparar los buques que admitan pronta composición y armar los que estén en estado de ello ... eligiendo los mejores, y si todavía sobrase gente, armando aun los que no son tan buenos, porque al fin es preciso sacar partido de cuanto tenemos». Le era preciso solamente a él, que necesitaba del apoyo de Napoleón para mantenerse en el poder.

Propio del talante de estos personajes, y revelador de su miseria moral e intelectual, es el hecho de que, después de haberse hecho responsable de la destrucción de la marina española, el favorito fuese nombrado almirante de España e Indias.

Godoy había especulado en diversas ocasiones con un cambio de alianzas, aproximándose a las potencias europeas que se enfrentaban a Francia, pero el 6 de octubre de 1806 cometió la imprudencia de dejar entrever estos propósitos en una insensata proclama en que hacía un llamamiento a prepararse para una guerra indeterminada. Pero así que el emperador hubo aplastado a sus enemigos europeos en Jena, el favorito —al que Capmany describió en las cortes de Cádiz como «más fatuo que malo, y más enloquecido que loco, que es aun peor»— se vio obligado a disculparse y su desliz hubo que pagarlo con el reconocimiento de José Bonaparte como rey de Nápoles, donde iba a ocupar el trono del que Napoleón había echado a un hermano de Carlos IV, con la adhesión al bloqueo continental contra Inglaterra y con el envío a Dinamarca de un cuerpo expedicionario español, mandado por el marqués de la Romana.

Llegó finalmente el momento en que Napoleón consideró que le convenía invadir Portugal, que, como aliado de Gran Bretaña, representaba un obstáculo para su plan de bloqueo continental, y se negoció por ello con España, esto es con Godoy, el tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), en el que se decidía el reparto del territorio portugués en tres partes que quedarían conjuntamente sometidas a una especie de protectorado nominal de España: las provincias del norte, con capital en Oporto, se convertirían en reino de Lusitania, para el rey de Etruria —un pequeño estado italiano, creado en 1801 sobre la base del territorio del Gran Ducado de Toscana, del que una hija

de Carlos IV era regente, y que Napoleón se proponía ahora liquidar—, otras en el sur constituirían el Principado de los Algarbes, donde reinaría Godoy, y una tercera zona quedaría «en depósito» hasta la paz general, que sería cuando se decidiese cómo disponer de ella. Se aprobaba también una convención aneja al tratado que determinaba que un cuerpo de tropas francesas (25.000 de infantería y 3.000 de caballería) entrarían en la Península para dirigirse directamente a Lisboa, y que España proporcionaría 11.000 hombres que se agregarían a los franceses, otros 10.000 para ocupar las provincias del norte y 6.000 para conquistar el Principado de los Algarbes, en el sur. Francia reuniría además en Bayona un cuerpo de 40.000 hombres, por si era necesario enviarlos como refuerzos a Portugal, en caso de que los ingleses interviniesen.

Cuán grande era el menosprecio que el emperador sentía por el gobierno de España lo revela el hecho de que el 18 de octubre, nueve días antes de que se firmase el tratado, las tropas francesas cruzaban ya la frontera y se alojaban en Irún.

Para entender mejor la naturaleza de los proyectos de Godoy conviene señalar que el 27 de octubre, el mismo día en que se firmaba el tratado de Fontainebleau, iniciaba el valido las actuaciones destinadas a desacreditar al príncipe de Asturias, a quien acusaba de estar conspirando contra la vida de sus padres, que culminarían en el ya mencionado proceso del Escorial. Carlos IV escribía al propio tiempo a Napoleón para explicarle que su hijo «había formado el horrible designio de destronarme, y había llegado al extremo de atentar contra los días de su madre», por lo cual pensaba reemplazarle como heredero por uno de sus hermanos y acababa «suplicándole me ayude con sus luces y consejos»: el escenario de las abdicaciones de Bayona comenzaba a prepararse, y era el propio rey el que invitaba a asumir el papel de protagonista al hombre que estaba invadiendo España con sus tropas.

Un imperio desarticulado

Una de las causas de la debilidad económica del estado derivaba de la crisis de sus relaciones con el imperio colonial americano, que, si se vio agravada por las interrupciones en la comunicación que habían provocado las guerras contra Inglaterra, nacía en realidad del fracaso del proyecto borbónico de un «segundo imperio».

A finales del siglo XVIII parecía claro que las llamadas «reformas borbónicas», que pretendieron revitalizar las colonias americanas, habían agotado sus efectos, tras haber permitido aumentar considerablemente los ingresos recaudados por la Hacienda Real en las cajas americanas y, más tarde, como consecuencia del «comercio libre», el tráfico de mercancías entre la metrópoli y las colonias, lo que conllevaba el consiguiente auge de las «rentas generales», que tenían como uno de sus componentes fundamentales los derechos de aduanas. El aumento de la presión fiscal en América—provocado, por ejemplo, por la extensión de las alcabalas a una serie de productos locales que antes no las pagaban— había conseguido dañar las actividades de las familias indígenas, como la producción de tejidos domésticos llamada de los «chorrillos», lo que acabó conduciendo a la gran insurrección indígena andina de 1780-1781.

El «comercio libre», por su parte, se estableció sin preocuparse por el hecho de que se basase en gran medida en productos extranjeros (las pretendidas manufacturas «nacionales» que se enviaban a América eran con frecuencia reexportaciones camufladas). No lo ignoraban las autoridades, que dejaron hacer, ya que sacaban provecho de esta legitimación de un contrabando encubierto que así pagaba, por lo menos, los cortos derechos fijados para las mercancías «nacionales».

Se consiguió con ello que aumentara la recaudación, hasta el punto que de 1788 a 1796 las rentas generales vinieron a representar de un 35 a un 40 por 100 de los ingresos ordinarios de la Hacienda española y crearon la falsa ilusión de que la monarquía se estaba aproximando a un cierto equilibrio financiero. Pero este aumento del comercio no iba a servir de estímulo para un desarrollo industrial metropolitano, sino que beneficiaba sobre todo a quienes especulaban con mercancías extranjeras que eran, a lo sumo, acabadas en España. Los intentos que se hicieron de montar fábricas de tejidos en Andalucía fracasaron, ante la imposibilidad de competir con los productos «nacionalizados».

Los comerciantes gaditanos que, como simples comisionistas que eran, habían invertido sus ganancias sobre todo en fincas urbanas y en deuda del estado, sostenían que el comercio libre sólo había beneficiado a las fábricas extranjeras, sin provecho ni para la industria ni para la agricultura propias, puesto que incluso los cereales que se consumían en los puertos andaluces se traían del extranjero. En las Indias, por otra parte, la acumulación de mercancías importadas acabó saturando el mercado, provocó la caída de los precios de las manufacturas europeas e hizo descender de nuevo, en los años finales del siglo XVIII, las importaciones de productos venidos de España.

Para que las cosas mudaran de signo hubiera sido necesario un cambio fundamental en el sistema de relaciones económicas entre España y sus colonias, en la línea de lo que estaban realizando otras metrópolis europeas en tiempos en que el comercio mundial experimentaba un rápido crecimiento. A finales del siglo XVIII se calculaba que Haití proporcionaba a Francia muchos más ingresos que los que España obtenía de Cuba y Puerto Rico juntos. Esta mitad de una isla alimentaba por sí sola la tercera parte del comercio exterior francés: 750 grandes embarcacio-

nes, con 80.000 marinos, aseguraban la conexión entre los puertos de Saint Domingue y los franceses de Burdeos, Nantes, El Havre o Marsella.

En 1788 un Campomanes que se encontraba ya al fin de su carrera reconocía el fracaso de la política española respecto de América. El comercio con las Indias, que hubiera debido ser una de las bases del desarrollo económico español y, en consecuencia, de la riqueza del estado, estuvo mal planteado desde su comienzo. Los negociantes de Sevilla, como después los de Cádiz, los más de los cuales eran simples testaferros de casas extranjeras, jamás se interesaron por «el comercio de frutos de Indias», sino sólo por «apropiarse el retorno de oro, plata y algunos otros géneros preciosos». La consecuencia había sido que «las islas y la mayor parte de las costas carecían de una correspondencia regular y directa con la España», con lo que ni podían dar salida a sus productos, ni adquirir los que necesitaban para su consumo. En estas circunstancias el «tráfico clandestino con aquellas naciones que frecuentaban sus costas», en especial con ingleses y holandeses, era inevitable, porque respondía a unas necesidades de los naturales que la metrópoli no se preocupaba de atender, de modo que no era extraño que hubiese acabado transformándose en «un comercio abierto, público y constante» contra el que nada podía la represión.

A que se realizasen los cambios necesarios en la naturaleza del tráfico se oponían los intereses que controlaban el comercio indiano a una y otra orilla del océano: los de los comerciantes de Cádiz, porque les convenía mantener las viejas reglas, que restringían el volumen del comercio pero aseguraban el elevado nivel de sus beneficios; los de los mercaderes de México, porque sus intereses económicos estaban ya más ligados a sus complejas vinculaciones con las actividades de su propio entorno que a la reventa de las mercancías importadas.